



UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 26 de septiembre de 2024

Oficio: UT/247-002/2024

Folio: 251264400024724

Asunto: Respuesta a solicitud de información.

Apreciable solicitante:

En atención a su solicitud de información, registrada con número de folio 251264400024724, correspondiente al control interno 247/2024, efectuada de manera electrónica a través del sistema Plataforma Nacional de Transparencia, presentada el día 12 de septiembre del año 2024, se le comunica lo siguiente:

I. Del trámite de su solicitud:

Dado que en la presente solicitud de información pide:

**“¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD HAY EN EL ESTADO DE SINALOA POR DELITOS DEL FUERO COMÚN?
¿CUÁNTAS MUJERES HAY PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL ESTADO DE SINALOA POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL?
¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD TIENEN SENTENCIA?
¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD ESTAN SIN SENTENCIA O BIEN EN PRISIÓN PREVENTIVA?
¿CUÁLES SON LOS TRES DELITOS DE MAYOR INDICENCIA POR LOS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD?
¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD SON INDÍGENAS?
¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA?
¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD ERAN JORNALERAS AGRÍCOLAS?”**

En relación a su *segundo pedimento*, se le comunica que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 fracciones I, III, XXIII y XXIV, 6, 14, 15, 16, 27 y 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 4, 5 fracciones VIII, XV y XVI, 10 fracciones IV y VII, 17, 18, 30 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la información requerida, es facultad correspondiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por lo que al ser una institución diferente a la que usted se dirigió, se le orienta a presentar su pedimento ante la autoridad señalada.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el siguiente Criterio 16/09 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que textualmente a la letra dispone lo siguiente:

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace

deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada –es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara.

Ahora bien, respecto a lo parcialmente concerniente a esta autoridad, mediante oficio número UT/247-001/2024 de fecha 12 de septiembre de 2024, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud a la Unidad Estadística Judicial, dependiente de la Secretaría Técnica de la Presidencia, área que cuenta con la información por así competir a sus atribuciones.

En respuesta a ese oficio, en fecha 23 de septiembre de 2024, el Dr. José Ramón Bohon Sosa, Secretario Técnico de la Presidencia, proporcionó la información solicitada, tras una búsqueda exhaustiva de lo requerido en los términos textualmente invocados, efectuada en archivos y registros de esta institución, misma que se anexa a la presente respuesta.

Oficios los anteriores, que se adjuntan al final de la presente respuesta, a efecto de dar constancia de que se realizaron las gestiones necesarias para la búsqueda exhaustiva de la información, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

II. De los plazos de respuesta y forma de entrega:

Esta respuesta se notifica en tiempo y forma en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dentro del plazo natural de respuesta, considerando que el término para brindarla es de 10 días hábiles, conforme lo previsto en los artículos 130, 136 y demás artículos aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, visto que el plazo comenzó a partir del día hábil siguiente a su presentación, con fecha de inicio 13 de septiembre de 2024 y fecha de expiración del 27 de septiembre de 2024; siendo inhábil el día 16 de septiembre de 2024, por acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, de fecha 14 de diciembre de 2023.

Conforme obra en registros, su petición para la entrega de la información es por medio del sistema Plataforma Nacional de Transparencia.

III. Del fundamento al procedimiento de atención de su solicitud:

Lo anterior se realizó conforme lo señalado por los artículos 1, 3 fracciones II y XXV, 4, 15 párrafo segundo, 16, 19, 20, 68 fracciones II, IV y V, 128, 130, 136, 140 último párrafo y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

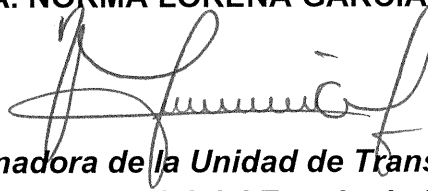
Estado de Sinaloa, así como los artículos 87 y 89 fracciones II, IV y V del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

La actuación de las áreas fue conforme lo señalado por el artículo 3 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 19 fracción II y 20 Bis del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia y el artículo Segundo del Acuerdo que Crea la Unidad de Estadística Judicial del Poder Judicial, ordenamientos todos del Estado de Sinaloa.

IV. De la aclaración a la respuesta proporcionada:

Deseando que la información proporcionada le sea de utilidad, en caso de cualquier duda, problemas al visualizar el contenido, estamos a sus órdenes en la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa ubicadas en Palacio de Justicia, con domicilio en Segundo Nivel, Lázaro Cárdenas 891, Colonia Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000; número telefónico 6677611723, así como en la cuenta de correo electrónico utstj@stj-sin.gob.mx

ATENTAMENTE
MTRA. NORMA LORENA GARCÍA LÓPEZ



***Coordinadora de la Unidad de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.***

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SINALOA



**PODER JUDICIAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**



UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de septiembre de 2024

Oficio: UT/247-001/2024

N° Control Interno: 247/2024



JOSÉ RAMÓN BOHON SOSA

*Secretario Técnico de la Presidencia del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.*

P r e s e n t e.

Por este conducto y atento a lo establecido en los artículos 19 fracciones II y V; 20 Bis fracción V del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; en relación con el numeral SEGUNDO del Acuerdo de Creación de la Unidad de Estadística Judicial del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; artículos 87 y 89, fracciones I, II y IV del Reglamento antes señalado; atendiendo a la información requerida electrónicamente a través de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA con folio número 2512644000024724, se solicita la siguiente información, que a continuación se transcribe:

“¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD HAY EN EL ESTADO DE SINALOA POR DELITOS DEL FUERO COMÚN?

¿CUÁNTAS MUJERES HAY PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL ESTADO DE SINALOA POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL?

¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD TIENEN SENTENCIA?

¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD ESTAN SIN SENTENCIA O BIEN EN PRISIÓN PREVENTIVA?

¿CUÁLES SON LOS TRES DELITOS DE MAYOR INDICENCIA POR LOS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD?

¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD SON INDÍGENAS?

¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA?

¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD ERAN JORNALERAS AGRÍCOLAS?”

Se pide su valiosa colaboración a fin de verificar la disponibilidad y existencia de lo señalado, y comunicar a esta Unidad la modalidad en la que se encuentra la información requerida, esto es, si se encuentra en soporte físico o electrónico, en el entendido que, en el primer supuesto deberá informar el número de copias que hayan de realizarse para su obtención y, en el segundo, deberá proporcionar el archivo o archivos correspondientes a la dirección electrónica institucional *norma.garcia@stj-sin.gob.mx*

Para el oportuno y eficaz cumplimiento en la atención de la solicitud de mérito, la respuesta al presente oficio deberá ser remitida a esta Unidad de Transparencia a más tardar el día *20 de septiembre de 2024*, proporcionando la información en archivo electrónico o documento.

En el supuesto de necesitar alguna aclaración sobre la misma deberá comunicarla a más tardar al día hábil siguiente al de su recepción.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
MTRA. NORMA LORENA GARCÍA LÓPEZ


***Coordinadora de la Unidad de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.***

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SINALOA



PODER JUDICIAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



PODER JUDICIAL

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PRESIDENCIA

LIC. NORMA LORENA GARCÍA LÓPEZ

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE.

En atención al oficio UT/247-001/2024 y No. De Control Interno 247/2024, tengo a bien informarle lo siguiente:

"¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD HAY EN EL ESTADO DE SINALOA POR DELITOS DEL FUERO COMÚN?"

No se cuenta con información a ese nivel de detalle estadístico.

"¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD HAY EN EL ESTADO DE SINALOA POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL?"

No es competencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

"¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD TIENEN SENTENCIA?"

No se cuenta con información a ese nivel de detalle estadístico.

"¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD ESTÁN SIN SENTENCIA O BIEN EN PRISIÓN PREVENTIVA?"

Desde la implementación del sistema penal acusatorio a la fecha se encuentran 69 mujeres privadas de la libertad bajo prisión preventiva.

"¿CUÁLES SON LOS TRES DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA POR LOS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD?"

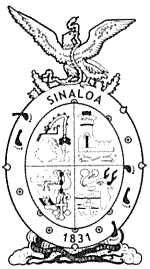
Robo, homicidio y violencia familiar con lesiones.

"¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD SON INDÍGENAS?"

No se cuenta con información a ese nivel de detalle estadístico.

"¿CUANTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA?"

Oficio
O-0912-ST



PODER JUDICIAL

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PRESIDENCIA

No se cuenta con información a ese nivel de detalle estadístico.

¿CUÁNTAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD ERAN JORNALERAS AGRÍCOLAS?"

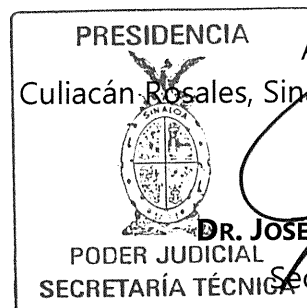
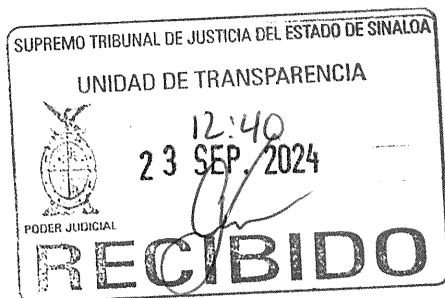
No se cuenta con información a ese nivel de detalle estadístico.

La presente información es proporcionada con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Transparencia local.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Reciba un cordial saludo.

Oficio
O-0912-ST



Atentamente,
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 23 de septiembre de 2024.

DR. JOSÉ RAMÓN BOHON SOSA
PODER JUDICIAL
SECRETARÍA TÉCNICA



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de septiembre de 2024

RESOLUCIÓN: EX21-002/2024

Declaración de Incompetencia CT247/2024

Solicitud de información: 251264400024724

Analizado el expediente citado en el rubro, formado con motivo de la declaración de incompetencia en lo relativo al *pedimento segundo*, para tramitar y dar respuesta a los elementos informativos contenidos en la solicitud con número de folio 251264400024724 afecta al control interno 247/2024, propuesta por la Mtra. Norma Lorena García López, Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, mediante oficio **UT247-002/2024**, este Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, integrado de acuerdo a lo previsto por el artículo Primero del Acuerdo de Creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, por los CC. Dr. José Ramón Bohon Sosa, en su carácter de Presidente, Mtra. Norma Lorena García López, Secretaria Ejecutiva, y Lic. Felipe Alberto Valle Nieblas, Vocal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, emite la presente resolución:

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. La solicitud de referencia fue presentada el día 12 de septiembre de 2024 a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el folio 251264400024724, texto íntegro que se presentó a los miembros del Comité.
2. Atendiendo a la petición contenida en el oficio **UT247-002/2024**, se advierte que se somete a consideración de este órgano colegiado, la incompetencia en lo relativo al *pedimento segundo*, objeto de la solicitud de información con número de folio 251264400024724, afecta al control interno 247/2024, en apego a lo dispuesto por el artículo 66 fracción II, en relación con el 140 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer de la mencionada solicitud.
3. Recibido el oficio antes citado, este Comité de Transparencia lo integró al expediente en el que se actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

II. COMPETENCIA

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 66, fracción II, y 140 párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; Primero y Segundo fracción II del Acuerdo de Creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Analizados los argumentos efectuados por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa mediante oficio **UT247-002/2024**, este Comité considera acertada la incompetencia de este organismo colegiado en lo relativo al *pedimento segundo*, para tramitar y dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 251264400024724 afecta al control interno 247/2024, orientando para que dicha solicitud se dirija al sujeto obligado que se menciona en el propio escrito de petición, que lo es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al sustentar su determinación en las consideraciones siguientes:

“Analizando el objeto de la solicitud, es consideración de esta Unidad de Transparencia comunicar que la información solicitada mediante pedimento segundo, no corresponde al ámbito de competencia de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, ya que dada su naturaleza, lo peticionado no concierne a las funciones, atribuciones y facultades de este Sujeto Obligado que en esencia, es garantizar a toda persona el efectivo derecho de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en términos de su artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que lo requerido mediante pedimento segundo; es facultad correspondiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior con fundamento en los 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 fracciones I, III, XXIII y XXIV, 6, 14, 15, 16, 27 y 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 4, 5 fracciones VIII, XV y XVI, 10 fracciones IV y VII, 17, 18, 30 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 fracción II, y 140 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a su consideración la declaración de incompetencia en lo relativo al pedimento segundo y en su momento se me comunique el resultado de ello.

En las relatadas consideraciones, solicito del Comité de Transparencia, analice, y en su caso, confirme la declaratoria de incompetencia en lo relativo al pedimento segundo que se le propone, de acuerdo a lo previsto por la fracción II del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.”

SEGUNDO. En ese orden de ideas la declaración de incompetencia en lo relativo al *pedimento segundo*, se considera acertada en razón de que, como lo señala la Coordinadora de la Unidad de Transparencia, es facultad correspondiente del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que no corresponde al ámbito de competencia de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en virtud de que dada la naturaleza, de lo peticionado no concierne a las funciones, atribuciones y facultades de este Sujeto Obligado, orientando para que la pretensión informativa que antecede la dirija y formule ante las autoridades señaladas, sustentando dicha determinación con fundamento en los siguientes artículos:

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; establece que:

Artículo 18. *Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.*

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

Párrafo reformado DOF 29-01-2016

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

Párrafo reformado DOF 02-07-2015, 29-01-2016

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes

mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.

Párrafo reformado DOF 02-07-2015

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculcados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Artículo reformado DOF 23-02-1965, 04-02-1977, 14-08-2001, 12-12-2005, 18-06-2008

Mientras que, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 2, 3 fracciones I, III, XXIII y XXIV, 6, 14, 15, 16, 27 y 29, señalan lo siguiente:

Artículo 2. *Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley.*

Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia.

En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales.

Artículo 3. *Glosario*

Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por:

I. Autoridad Penitenciaria: *A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargada de operar el Sistema Penitenciario;*

...

III. Centro o Centro Penitenciario: Al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas;

...

XXIII. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria: Al compendio de Registros Administrativos, Censos y Encuestas relativos al sistema penitenciario, en los ámbitos federal y local, de conformidad con el artículo 29 de esta Ley;

XXIV. Sistema Penitenciario: Al conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir;

Artículo 6. Organización del Centro Penitenciario

El régimen de planeación, organización y funcionamiento de la Autoridad Penitenciaria y de los Centros Penitenciarios estará sujeto a su normatividad reglamentaria respectiva, siempre de conformidad con la presente Ley.

La Autoridad Penitenciaria promoverá que los Centros Penitenciarios sean sustentables.

Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria

La Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas.

Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del Sistema Penitenciario.

Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria

La Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas:

I. Garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario;

II. Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales;

III. Gestionar la Custodia Penitenciaria;

IV. Entregar al Juez de Ejecución, a solicitud fundada de parte, la información para la realización del cómputo de las penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio domicilio cumplidos por la persona sentenciada;

V. Dar aviso al Juez de Ejecución, cuando menos cinco días hábiles previos al cumplimiento de la pena, acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutoriada;

VI. Autorizar el acceso a particulares y autoridades a los Centros Penitenciarios, quienes deberán acatar en todo momento las disposiciones aplicables y de seguridad aplicables, en los términos, condiciones y plazos que establece esta Ley;

VII. Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad por violación al régimen de disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos humanos;

VIII. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado;

IX. Realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas;

X. Presentar al Juez de Ejecución el diagnóstico médico especializado en el que se determine el padecimiento físico o mental, crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente la persona privada de la libertad, con el propósito de abrir la vía incidental tendiente a la modificación de la ejecución de la pena por la causal que corresponda y en los términos previstos por la legislación aplicable;

XI. Ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifiquen tanto el órgano jurisdiccional como el Juez de Ejecución;

XII. Aplicar las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales y que se cumplan en los Centros;

XIII. Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que lo requieran;

XIV. Promover ante las autoridades judiciales las acciones dentro del ámbito de su competencia y cumplir los mandatos de las autoridades judiciales;

XV. Brindar servicios de mediación para la solución de conflictos interpersonales derivados de las condiciones de convivencia interna del Centro, y de justicia restaurativa en términos de esta Ley, y

XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos.

Artículo 16. Funciones del Titular de los Centros Penitenciarios

Los titulares de los Centros Penitenciarios, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Administrar, organizar y operar los Centros conforme a lo que disponga esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II. Representar al Centro ante las diferentes autoridades y particulares;

III. Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables;

IV. Implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro;

V. Declarar al Centro en estado de alerta o de alerta máxima, e informar inmediatamente a su superior jerárquico, en términos de las normas aplicables;

VI. Solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal en casos de emergencia;

VII. Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones, con respeto a sus derechos humanos;

VIII. Expedir y vigilar que se emitan los documentos que le sean requeridos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como, expedir certificaciones que le requieran las autoridades o instituciones públicas, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el asesor jurídico, la persona sentenciada y su defensor de los documentos que obren en los archivos del Centro Penitenciario;

IX. Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del Juez de Ejecución u órgano jurisdiccional correspondiente;

X. Realizar las demás funciones que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, en el ámbito de su competencia, y

XI. Además de las señaladas en esta Ley, las que prevea la normatividad de la administración penitenciaria.

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad La Autoridad Penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal para cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con lo siguiente:

I. La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá, al menos, la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un Centro Penitenciario:

A. Clave de identificación biométrica;

B. Tres identificadores biométricos;

C. Nombre (s);

D. Fotografía;

E. Estado y municipio donde se encuentra el Centro Penitenciario;

F. Características sociodemográficas tales como: sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, nacionalidad, estado de origen, municipio de origen, estado de residencia habitual, municipio de residencia habitual, condición de identificación indígena, condición de habla indígena, estado civil, escolaridad, condición de alfabetización, y ocupación;

G. Los datos de niñas y niños que vivan con su madre en el Centro Penitenciario;

H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III. Esta base de datos deberá servir a la Autoridad Penitenciaria para garantizar que la duración y condiciones de la privación de la libertad sean conforme a la ley.

Existirá una versión pública de la base de datos para atender el Sistema de Información Estadística Penitenciaria;

II. El expediente médico contará con el historial clínico de cada persona privada de la libertad, mismo que se integrará por lo menos con:

A. Ficha de identificación;

B. Historia clínica completa;

C. Notas médicas subsecuentes;

D. Estudios de laboratorio, gabinete y complementarios, y

- E. Documentos de consentimiento informado;
- III. El expediente de ejecución contendrá, al menos:
- A. Nombre;
 - B. Tres identificadores biométricos;
 - C. Fotografía; D. Fecha de inicio del proceso penal;
 - E. Delito;
 - F. Fuero del delito;
 - G. Resolución privativa de la libertad y resoluciones administrativas y judiciales que afecten la situación jurídica de la persona privada de la libertad;
 - H. Fecha de ingreso a Centro Penitenciario;
 - I. Estado y municipio donde se encuentra el Centro Penitenciario;
 - J. Nombre del Centro Penitenciario;
 - K. Estado y municipio donde se lleva a cabo el proceso;
 - L. Fecha de la sentencia;
 - M. Pena impuesta, cuando sea el caso;
 - N. Traslados especificando fecha, así como lugar de origen y destino;
 - O. Inventario de los objetos personales depositados en la Autoridad Penitenciaria; P. Ubicación al interior del Centro Penitenciario;
 - Q. Lista de las personas autorizadas para visitar a la persona privada de la libertad;
 - R. Sanciones y beneficios obtenidos;
 - S. Información sobre cónyuge, o pareja, familiares directos, así como dependientes económicos, incluyendo su lugar de residencia, origen y/o arraigo, y
 - T. Plan de actividades;
- IV. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender en los siguientes supuestos:
- A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial;
 - B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos;
 - C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible;
 - D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero;
 - V. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción I del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando:
- A. Se resuelva la libertad del detenido;
 - B. En la investigación no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercer la acción penal;
 - C. Se haya determinado la inocencia de la persona imputada;
 - D. El proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que cause estado;
 - E. En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la causa que se le sigue a la persona imputada;
 - F. La persona sentenciada sea declarada inocente por resolución dictada en recurso de revisión correspondiente;
 - G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley;
 - H. Cuando la pena se haya declarado extinguida;
 - I. La persona sentenciada lo haya sido bajo vigilancia de una ley derogada o por otra que suprima al hecho el carácter de delito;

J. A la persona sentenciada se conceda la amnistía, el indulto o la conmutación, o
K. Se emita cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal.

Artículo 29. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria El Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria compartirá los registros administrativos, derivados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por su naturaleza estadística sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el adecuado desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, así como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.

Para el caso de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, el Instituto recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos con los que cuentan los sistemas penitenciarios en el ámbito federal y local para ejercer sus funciones, en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El Instituto recabará también información estadística sobre características demográficas, socioeconómicas y familiares de la población penitenciaria, así como de su situación jurídica. De igual forma, el Instituto recabará la información sobre los delitos y penalidad por los cuales son ingresadas las personas y recolectará información sobre las víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos a proceso, entre otras cosas.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las Personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha Encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los Centros Penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la Encuesta deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad.

Por último, los artículos 4, 5 fracciones VIII, XV y XVI, 10 fracciones IV y VII, 17, 18, 30 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen que:

Artículo 4.- El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación, en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Párrafo reformado DOF 27-05-2019

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;

...

XV. Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema;

XVI. Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

Fracción reformada DOF 27-05-2019

...

Artículo 10.- El Sistema se integrará por:

...

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

...

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

Artículo 17.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de treinta años de edad;

III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;

IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y

V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

Artículo 18.- Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;

II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;

III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;

IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;

- VII. *Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;*
- VIII. *Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;*
- IX. *Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;*
- X. *Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;*
- XI. *Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;*
- XII. *Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;*
- XIII. *Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;*
- XIV. *Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;*
- XV. *Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y efficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;*
- XVI. *Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;*
- XVII. *Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;*
- XVIII. *Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;*
- XIX. *Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;*
- XX. *Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;*
- XXI. *Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;*
- XXII. *Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;*

XXIII. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;

XXIV. Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y

XXV. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

Artículo 30.- La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación y de las entidades federativas, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Párrafo reformado DOF 27-05-2019

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.

Artículo 31.- Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

I. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;

II. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;

III. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;

IV. Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social;

V. Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;

VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación y las entidades federativas, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;

Fracción reformada DOF 27-05-2019

VII. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en el Sistema Nacional de Información;

Fracción reformada DOF 30-11-2010, 27-05-2019

VIII. Formular los lineamientos para que la federación y las entidades federativas cumplan, en el ámbito de sus competencias, con la obligación de adquirir, instalar y mantener en operación equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

Dichos equipos serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos, contarán con sistemas automáticos que envíen señales de alarma ante cualquier interrupción en su funcionalidad y serán monitoreados por el

Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

El bloqueo de señales a que se refiere este artículo se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación móvil y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos.

Fracción adicionada DOF 30-11-2010. Reformada DOF 17-04-2012

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.
Fracción recorrida DOF 30-11-2010

TERCERO. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 66 fracción II, y 140 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral Segundo fracción II del Acuerdo de Creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y tomando en consideración los fundamentos y motivos propuestos por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia de este Supremo Tribunal de Justicia, se procede a **confirmar por unanimidad** la declaración de incompetencia en lo relativo al *pedimento segundo*, para tramitar y dar respuesta a la solicitud con número de folio 251264400024724 afecta al control interno 247/2024, señalándose como competente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

IV. RESOLUCIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se **CONFIRMA** la declaración de incompetencia en lo relativo al *pedimento segundo*, para tramitar y dar respuesta a la solicitud con número de folio 251264400024724 afecta al control interno 247/2024, según lo precisado en el punto SEGUNDO de Consideraciones y Fundamentos de esta resolución.

SEGUNDO. Se determina reconducir la solicitud con número de folio 251264400024724 dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme lo dispuesto en el punto TERCERO de las Consideraciones y Fundamentos de esta resolución.

TERCERO. Se instruye a la Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, notificar al solicitante, para los efectos conducentes.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria número **EX21/2024 de fecha 25 de septiembre de 2024**, por unanimidad de votos de sus integrantes, CC. Dr. José Ramón Bohon Sosa, Presidente, Mtra. Norma Lorena García López, Secretaria Ejecutiva y Lic. Felipe Alberto Valle Nieblas, Vocal, de conformidad con los artículos 65, 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Segundo

fracción II y Tercero fracción III del Acuerdo de Creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.



Dr. José Ramón Bohon Sosa
Presidente



Mtra. Norma Lorena García López
Secretaria Ejecutiva



Lic. Felipe Alberto Valle Nieblas
Vocal